
INFORME GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2003

Transparencia Internacional

INTRODUCCION

A los corruptos se les están agotando los escondites. Éste es el mensaje que se desprende del *Informe Global de la Corrupción 2003*. Gracias a la tecnología que facilita la difusión de información actualizada y precisa, los medios y la sociedad, de forma creciente, exigen al sector privado y a los políticos que rindan cuentas.

A fin de garantizar la difusión de la información, los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en Alemania, el Líbano, México, Panamá y muchos otros países han hecho campaña a favor de la libertad de información. Bajo el escrutinio de éstos y de otras organizaciones civiles, y del público en general, los gobiernos están tomando medidas para impulsar la causa de la transparencia. Desde Chile y Brasil hasta Corea del Sur y la India, la propagación del sistema de e-government (gobierno electrónico) implica un uso más generalizado de la Internet para transmitir la información de dominio público y para abrir a la sociedad el proceso de ofertas en licitaciones públicas y privatizaciones.

Pero la libertad de información no es suficiente. No importa el grado de profesionalismo y precisión con el que se procese la información, la corrupción continuará prosperando si los medios y la sociedad civil no ejercen su función de observadores, y si los periodistas de investigación y, especialmente, los delatores dejaran de exhibir el valor que han demostrado hasta ahora.

Estos defensores de la transparencia son tan esenciales en el mundo en desarrollo como en el mundo desarrollado. La sección correspondiente a los informes regionales de este volumen se inicia con las revisiones de Europa Occidental y Norteamérica, desde donde el escándalo de Enron hizo tambalear al sector corporativo mundial y menoscabó gravemente la confianza de la sociedad en la integridad del sector privado. Enron y los otros escándalos que le sucedieron intensifican la percepción de colusión entre auditores, consultores impositivos, abogados y banqueros y sus clientes corporativos en la manipulación de los registros contables para el beneficio a corto plazo de los administradores, lo que constituye un flagrante atropello a la

confianza investida en ellos por los accionistas, empleados y la sociedad en general.

En cierta medida, las iniciativas internacionales como la Convención de 1997 de Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pueden desalentar este tipo de conducta no ética. A pesar de que el propósito primordial de la misma es penalizar el cohecho de funcionarios públicos en el extranjero, la convención y los instrumentos relacionados de la OCDE también tocan cuestiones tales como informes contables, auditoría y controles corporativos. TI ha instado a la OCDE a que insista en promover avances en estas áreas en sus estados miembro dado que la Convención todavía no ha causado un impacto lo suficientemente revelador. Se están investigando sólo unos pocos casos en virtud de la convención, y se observa en la mayoría de los países miembro de la OCDE una falta de voluntad política para procesar judicialmente a aquellos involucrados en notorios casos de cohecho.

FACULTANDO AL PODER JUDICIAL PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN

El Informe Global de la Corrupción no es el único en llamar la atención hacia los recientes escándalos en torno a Enron, WorldCom y otras sociedades que cotizan en Bolsa en los Estados Unidos, ni tampoco es la única voz que se alza para exigir la implementación de mecanismos de control y de presentación de informes más eficaces a fin de evitar la recurrencia de estos hechos. Estos casos giraron en torno a empresas privadas bajo el control de organismos externos que en sí presentaban conflictos de intereses entre sus funciones de auditoría y de consultoría. Algunos de estos grupos industriales, instituciones financieras y proveedores de servicios ejercen más presión a escala mundial que muchos países. Sin embargo, lo que ha salido a relucir en el sector privado también puede algún día aparecer en la esfera pública con respecto a la obligación del estado de responder por sus actos ante la sociedad.

La transparencia en el gobierno está supeditada al control parlamentario, el basamento de la democracia, que se mantiene gracias a los fondos públicos. Pero, a menudo, se observa un desequilibrio entre las prerrogativas del ejecutivo y la capacidad que tiene el parlamento de ejercer verdaderamente su función reguladora sobre el gasto público y el presupuesto. Por ejemplo, ¿cuán exactas son las cifras relacionadas con los déficits presupuestarios, la balanza de pagos, los cálculos de la tasa de crecimiento, la inversión extra presupuestaria en los fondos de jubilación y pensión o las previsiones para que el estado pueda cumplir con su responsabilidad en el área de la salud pública?

En los últimos años la dimensión de la corrupción global se caracterizó por la repetida participación de funcionarios públicos en transferencias fraudulentas de fondos privados y públicos. Se puede evitar la corrupción si se exige mayor transparencia en los informes contables y se implementan mejores mecanismos de control, especialmente en el caso de intervenciones internacionales - ya sea en relación con asistencia o ali-

vio en situaciones de desastre - y de los contratos de explotación de recursos naturales firmados entre grandes corporaciones y los estados.

La batalla contra las transacciones financieras ilícitas debe librarse con una sólida estrategia que faculte al sistema de justicia para que éste pueda convertirse en un arma indispensable de la misma. Por lo tanto, constituye una paradoja que los presupuestos asignados a la justicia representen sólo una mínima parte del gasto público. Por ejemplo, en países europeos como España, Francia y Alemania, sólo se asigna el 1-2% del presupuesto al sistema de justicia.

En el entorno internacional actual, es pertinente reconsiderar esta asignación de recursos ya que, sin un sistema de justicia operativo y dotado de suficientes recursos, ninguna investigación puede llegar a buen término. Cuando el sistema de justicia sobrecargado y sin los suficientes recursos se enfrenta al crimen organizado, este último tiene garantizada la impunidad.

Si no se realizan esfuerzos para modernizar las instituciones jurídicas, los futuros acuerdos internacionales no se podrán ejecutar y nuestras democracias seguirán amenazadas por la incapacidad que demostramos en la persecución de la corrupción y de otras actividades delictivas.

Además, el proceso de monitoreo de la OCDE, que fuera diseñado para garantizar la efectiva implementación y ejecución de la Convención por parte de los estados miembro, carece de los recursos necesarios y registra demoras en su accionar. La Convención fracasará si la OCDE no puede presionar a los gobiernos para que éstos lleven ante la justicia a aquellos responsables de sobornar a funcionarios extranjeros.

La reforma legislativa no es el único medio para impulsar la transparencia. Dentro del sector corporativo, muchos líderes de negocios también están asumiendo el desafío de cercenar la corrupción. El Índice de Fuentes de Soborno (IFS) 2002 revela que se percibe a las compañías de los principales países industrializa-

dos como levemente menos proclives al cohecho que al momento del primer IFS realizado en 1999. Sin embargo, hay empresas en Gran Bretaña y Estados Unidos que representan notables excepciones a esta tendencia. Muchas empresas comprenden que erradicar el cohecho tiene sentido desde el punto de vista económico. Una encuesta realizada por Social Weather Stations a fines de 2001 reveló que los empresarios en las Filipinas estaban dispuestos a destinar un dos por ciento de sus ingresos netos corporativos a la financiación de programas anticorrupción. Habían estimado que evitar la corrupción redundaría en un aumento del cinco por ciento en sus ingresos netos y en un ahorro del 10 por ciento en los contratos.

A escala nacional, también se evidencia el avance en la lucha contra la corrupción. Hemos escuchado noticias alentadoras provenientes de los países en Europa Central y Oriental en fase de adhesión a la Unión Europea donde gracias a la voluntad política y la sociedad civil - junto a la presión ejercida por actores internacionales - se han realizado esfuerzos a fin de promover la transparencia y el buen gobierno. Sin embargo, el ritmo también es lento para revertir el perjuicio que ocasiona la corrupción a la reputación personal, pública y corporativa. En todo el mundo, el público sufre una terrible pérdida de confianza y la ciudadanía confía menos en los partidos políticos que en ninguna otra institución pública. Los más recientes datos del Nuevo Barómetro Europeo presentados en la sección sobre datos e investigación de este informe, revelan que en Europa Central y Oriental en su conjunto sólo una de cada ocho personas confía en los partidos políticos y sólo una de cada siete verdaderamente confía en los miembros del parlamento. Mientras que todavía queda mucho por mejorar, en los últimos doce meses fuimos testigos de notables éxitos en la lucha contra el lavado de dinero y en la repatriación de bienes robados. Los acontecimientos del 11 de septiembre indujeron al gobierno de Estados Unidos y a otros a reconocer la naturaleza

perniciosa del lavado de dinero y a instar al Grupo de Trabajo sobre Acción Financiera de la OCDE a ajustar aún más sus estrictas pautas contra el lavado de dinero. La cooperación internacional entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad ha aumentado, y en noviembre del año 2001, la UE adoptó una nueva directiva sobre el lavado de dinero que obliga a los estados miembro a combatir el lavado de las ganancias obtenidas de la comisión de delitos graves, inclusive la corrupción.

El *Informe Global de la Corrupción 2003* también refleja una tendencia positiva entre los donantes. Si bien ya en el informe 2001 nos habíamos percatado de los esfuerzos realizados por las organizaciones para detener la corrupción, en el último año éstas se han vuelto más exigentes, insistiendo en la necesidad de

comprometerse con las políticas y procedimientos anticorrupción. Este enfoque encaja con la apertura de las cuentas públicas al escrutinio independiente. Los donantes también deberían insistir en que la sociedad civil goce de un acceso completo al monitoreo de los gastos y que pueda verificar que la ayuda llegue a los beneficiarios y proyectos para los cuales fue destinada, como escuelas y hospitales.

Desde que las organizaciones civiles se organizan de manera más eficiente, especialmente en muchos países del continente africano, también realizan importantes aportes a la causa anticorrupción. Los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en África están impulsando una campaña para la repatriación de los bienes apropiados en forma ilegal por los ex dictadores y depositados

en cuentas bancarias en Londres, Zurich, Nueva York y Liechtenstein. Finalmente, los nigerianos casi presenciaron el retorno de USD 1.200 millones en fondos, robados por el difunto dictador Sani Abacha, hasta que el hijo de este paró el proceso antes de firmar un acuerdo que incluía una cláusula mediante la cual se retiraban los cargos por robo y lavado de dinero contra este y sus socios. En este frente, también se avanzó en Sudamérica. En Perú, el gobierno de Alejandro Toledo ha realizado significativos esfuerzos para enmendar los errores de la era de Fujimori. Por ejemplo, se han congelado USD 225 millones depositados en cuentas alrededor del mundo a nombre del jefe de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y de otros implicados en actos de corrupción.

MANTENIENDO A LA CORRUPCION BAJO VIGILANCIA

Las fuerzas de seguridad deben jugar un papel primordial en garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales en una sociedad democrática. La corrupción puede socavar la capacidad de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de su misión y, en consecuencia, impedir que la sociedad funcione justa y eficientemente.

Esto es especialmente válido cuando la corrupción obstaculiza la ejecución de la ley misma. Un oficial de seguridad corrupto que obstruye el accionar de la justicia puede hacer que la aplicación de la ley sea ineficaz en la lucha contra los delitos en general. Esto, a su vez, puede socavar la confianza y seguridad de la sociedad en sus instituciones.

A aquellos involucrados en el crimen organizado, por regla general, los mueve un único objetivo: el lucro. El contrabando de armas, el tráfico de personas y drogas, y los delitos financieros generan cuantiosas sumas de dinero. El dinero se lava de manera tal que aparece en nuestro sistema financiero como el producido de actividades comerciales legítimas. En muchos casos, la corrupción allana el camino para la comisión de estos delitos. El crimen

organizado invierte copiosamente hasta que descubre un "eslabón débil", alguien que se puede persuadir o sobre el cual se puede ejercer coerción para que colabore. Se apunta a banqueros, abogados, fiscales o jueces, políticos, funcionarios a cargo de la emisión de pasaporte, personal de embajadas y a miembros de las fuerzas de seguridad como oficiales de aduana y de la policía. A menudo, el bien más preciado es la información, la divulgación de la cual puede poner en peligro el accionar policial.

Como Secretario General de Interpol, la única organización policial mundial, he asumido el compromiso de lograr la excelencia en la comunicación y utilización de la información policial. He asignado prioridad a nuestras actividades de intercambio de información como, por ejemplo, el intercambio en tiempo real de información policial clave a fin de combatir una gama de graves delitos, inclusive la corrupción.

La comunidad internacional todavía siente los cimbronazos de los acontecimientos del 11 de septiembre. Las fuerzas de seguridad a escala mundial han mancomunado sus esfuerzos para evaluar sus propias

estructuras y sistemas a fin de remediar las vulnerabilidades que podrían debilitar sus esfuerzos en la lucha y la prevención del terrorismo. No se puede descartar que futuros ataques terroristas pudieran ser facilitados por la corrupción policial.

Parte de la solución para la aplicación de leyes sería garantizar que existen sistemas nacionales e internacionales de integridad. En aquellos casos en los que ya existen, debemos permanecer alertas y afinarlos o mejorarlos a fin de identificar los focos de corrupción, para evitar que los corruptos o aquellos proclives a involucrarse en actividades corruptas sean reclutados y, aún más importante, aumentar las posibilidades y el temor de ser atrapado y de verse expuesto.

Interpol, a través de su Grupo de Expertos sobre Corrupción, ha desarrollado un sistema de integridad para las fuerzas de seguridad. Para nuestra Asamblea Anual en Camerún en octubre de 2002, los 179 estados miembro de Interpol fueron invitados a adoptar los abarcadores "Estándares Globales para combatir la Corrupción en las Fuerzas y Servicios Policiales". Dichos estándares, aunque no fueran legalmente vincu-

lantes, son esenciales para una organización cuya tarea principal es la de intercambiar información policial sensible. Se monitoreará la implementación de los estándares que ya han sido adoptados por la mayoría de los estados miembro de Interpol. Apoyaremos la implementación ofreciendo capacitación y programas de intercambio entre profesionales.

Sigo comprometido a garantizar que Interpol asista a sus miembros de esta manera para brindar un servicio eficaz, asentado en sólidos valores éticos infundidos de un alto grado de integridad profesional. Concentrarse en el eficiente intercambio de información y en el esfuerzo para fortalecer el papel de la policía dentro de los sistemas de integridad es crucial en la construcción de una causa común contra la corrupción.

Los esfuerzos de la sociedad civil para combatir la corrupción son apuntalados por el trabajo de los periodistas de investigación. En octubre de 2001, el Comité de Selección del Premio de Integridad de Transparencia Internacional brindó un homenaje a la memoria de cuatro individuos que perdieron la vida a causa de sus tenaces esfuerzos para eliminar la corrupción. Tres de ellos eran periodistas. Carlos Alberto Cardoso, periodista de investigación en Mozambique fue asesinado en noviembre de 2000 mientras investigaba el fraude bancario más grande en la historia de su país. Georgy Gongadze, periodista ucraniano que pusiera de relieve la corrupción gubernamental en su servicio informativo por Internet, fue brutalmente decapitado y quemado con ácido en el otoño del año 2000.

Norbert Zongo, un periodista de investigación de Burkina Faso y secretario de redacción del semanario *L'Indépendant* fue asesinado en 1998; el caso sigue sin resolverse. En el año 2001, uno de cada cuatro periodistas asesinados estaban investigando casos de corrupción y las muertes todavía continúan.

Sin embargo, debemos recordar que hay un sinnúmero de casos donde los medios descuidan el rol que debieran ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos y, en cambio, alimentan vínculos indebidamente estrechos con líderes políticos. En este marco, no es factible que los medios puedan sacar a la luz casos de corrupción. De hecho, un reciente estudio realizado por el Banco Mundial revela que la exposición de casos corrupción no es tan común entre los medios de propiedad estatal como entre sus homólogos en el sector privado. En el Medio Oriente, muchas estaciones de televisión son de propiedad de ministros de gobierno y nadie parece percatarse de los conflictos de intereses existentes. Los periodistas en la región corren el riesgo de ser encarcelados por criticar a los líderes políticos, y la mayoría de las legislaturas de la región no han todavía redactado, promulgado ni puesto en vigor leyes que garanticen la libertad de información. La presión política y las relaciones impropias con figuras públicas no son los únicos obstáculos que se interponen en el camino de asegurar altos estándares periodísticos. En muchos países, la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos amenaza cada vez más el rol vital de los mismos en la lucha anticorrupción. Los problemas de con-

flictos de intereses y concentración de los medios son muy pronunciados en Italia, donde el Primer Ministro Silvio Berlusconi controla la mayoría de las estaciones de televisión privadas así como también la red de televisión pública. Berlusconi había prometido resolver el conflicto existente entre su cargo político y los intereses de los medios dentro de los primeros 100 días de gobierno, pero para mediados de 2002 no había todavía indicios de que fuera a cumplir su promesa. Como miembro de la UE, Italia ha dado un ejemplo pasmoso a los candidatos que pretenden adherirse a la UE que hace muy poco lograron escapar de las garras de la censura estalinista.

La sociedad civil y las instituciones internacionales enfrentan la corrupción en muchos frentes. La corrupción - que continúa destruyendo la confianza en las instituciones públicas y privadas - es un problema sistémico; por lo tanto, los medios para derrotarla también deben ser de gran alcance y sistémicos. En esta lucha, se deben utilizar leyes y reglamentaciones contra el uso indebido del poder. Si se ha de restaurar la confianza en las instituciones públicas y privadas, se deberá garantizar el acceso a la información para promover la transparencia, y ésta quizás sea el arma más poderosa contra la corrupción. Sólo al hacer hincapié en el acceso a la información y en una mayor transparencia en todas las esferas de la sociedad, desde lo local hasta lo intergubernamental, podrán la sociedad civil, el sector privado y el gobierno razonablemente intentar detener y exponer la corrupción y así asegurar que los corruptos ya no tengan sitios en donde esconderse.

SUDAMÉRICA

En los últimos meses, Sudamérica se ha visto sacudida por crisis económicas, malestar social y el rechazo popular a los líderes políticos de la región. Desde Argentina hasta Paraguay, Venezuela y Perú, encolerizados manifestantes salieron a las calles para ventilar su frustración, y la estabilidad de varias naciones parece estar en peligro.

El flagelo persistente de la corrupción en Sudamérica ha alimentado las raíces del descontento. Más de una década después de que la transición a la democracia reavivara la esperanza de la reforma, la región continúa siendo presa de redes de elites que abusan de su posición para obtener ganancias ilícitas. Las mismas instituciones responsables de evitar y luchar contra la corrupción son demasiado débiles para cumplir con su cometido, o bien, se ven comprometidas por la influencia de los transgresores mismos. Como refleja tan vividamente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2002 de Transparencia Internacional, los encuestados consideran a Sudamérica una de las regiones más asediadas - o la más asediada- por la corrupción del mundo.

El soborno contribuye a agravar los problemas económicos del continente estancando la productividad y privándola de los ya escasos recursos financieros. Pero el efecto maligno de la corrupción es más profundo: en la actual crisis económica, las continuas revelaciones de corrupción gubernamental han erosionado la credibilidad en las instituciones de gobierno, los programas de reforma y la frágil confianza de la sociedad en el proceso político mismo. Las recientes encuestas arrojan dos tendencias ominosas e interrelacionadas: los sudamericanos creen que la corrupción está empeorando, y están cada vez más desilusionados con la democracia.

Sin embargo, la persistencia de la corrupción en Sudamérica ha impulsado y fortalecido los esfuerzos para combatirla. En la actualidad, hay cientos de investigaciones en curso de las actividades del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, mientras que en Bolivia un ex presidente y varios otros funcionarios están siendo investigados por estafar al país en millones de dólares. Sin embargo, el cambio de líderes en ambos países

ha puesto en juego la continuidad de los programas de reforma.

Las organizaciones internacionales, profundamente preocupadas por la amenaza que la corrupción plantea a la democracia y al crecimiento de la región, siguieron aportando recursos financieros, proveyendo asistencia técnica y promoviendo tratados internacionales.

A pesar de que la sociedad civil, exasperada por los acontecimientos, ha aunado fuerzas para luchar contra la corrupción, la reacción hasta ahora se ha caracterizado por expresiones de ira pública. Las manifestaciones generalizadas en las calles de la región el año pasado todavía no se han transformado en un movimiento coherente a favor del cambio constructivo. Es de preocupar que los sudamericanos parezcan cada vez más inclinados a rechazar de plano el sistema político, en lugar de considerarlo un instrumento de progreso.

Mientras que los medios se mostraron como potentes defensores de la lucha anticorrupción durante el año, la libertad de prensa en la región sufrió ataques, y se registraron numerosos casos de intimidación, exilio forzoso o asesinato de periodistas.

INTERNACIONALES Y REGIONALES

En los últimos 12 meses nos hemos percatado de que las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestan creciente atención a las cuestiones relacionadas con la corrupción.¹ Durante la última década, las IFI se han concentrado en la reforma de políticas económicas en la región, por lo que han comenzado a asignar más recursos a las reformas de naturaleza institucional de "segunda generación". Con mayor frecuencia, a los donantes les preocupa que se otorgue financiación para el desarrollo a gobiernos corruptos y condicionan cada vez más el otorgamiento de nuevos préstamos a la implementación de salvaguardas contra la corrupción. Estados Unidos también ha demostrado mayor caute-

la en el trato con sus vecinos latinoamericanos a causa de la desenfadada corrupción que se observa en la región.²

En enero de 2002, la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió emprender un seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. A mediados de 2002, el Comité de Expertos compuesto por técnicos gubernamentales de los estados miembro aprobó un cuestionario modelo y una metodología para examinar el cumplimiento de la Convención en áreas tales como declaración de ingresos, los bienes y los gastos de los funcionarios públicos y la eficacia de la gestión de los organismos fiscalizadores.³ A pesar de que no se impondrán sanciones jurídicas formales a los países que no

hayan logrado la plena implementación de la Convención, los informes que deberán confeccionarse sobre la evaluación servirán para exigir a los gobiernos que cambien o mejoren los puntos que los expertos consideran incumplidos.⁴

Hasta ahora, tres de los cuatro países no-miembro que adhirieron a la Convención Antisoborno de la OCDE son sudamericanos: Argentina, Brasil y Chile. Argentina y Brasil han ratificado la Convención, que adopta reglas comunes para sancionar a las empresas y personas físicas involucradas en transacciones de soborno, y que penaliza el pago de sobornos a países extranjeros. En junio de 2001, la OCDE también lanzó la Iniciativa de Buen Gobierno para América Latina con el propósito de apoyar la instrumentación de las

convenciones de la OCDE y de la OEA en la región a través de una serie de talleres y foros.⁵ A pesar de que las Convenciones de la OEA y de la OCDE constituyen hitos de relevancia en el camino de la lucha anticorrupción, existe una inmensa brecha entre los compromisos asumidos y la realización de cambios significativos en el ámbito nacional. Ningún país en el hemisferio occidental ha cumplido cabalmente los principales requerimientos de la convención de la OEA, y, además la instrumentación de la misma ha sido lenta.⁶

El BID ofreció préstamos en apoyo de iniciativas anticorrupción y de transparencia a varios países en Sudamérica durante el periodo 2001-02. Entre ellos se deben mencionar un préstamo otorgado a Chile para apoyar la modernización de la Contraloría General,⁷ y otro a Bolivia destinado a establecer un sistema integrado de gestión financiera en 91 de las 314 municipalidades del país.⁸ El Fondo de Inversión Multilateral del BID también aprobó una donación de USD 1.230.000 en junio de 2001 para ayudar a la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú,

Uruguay y Venezuela a crear y fortalecer las Unidades de Inteligencia Financiera dedicadas a la detección y análisis de transacciones sospechosas que podrían ser operaciones de lavado de dinero.⁹

El Instituto del Banco Mundial ofreció una serie de cursos diseñados para alentar a los representantes de los diferentes sectores de la sociedad: sector público, sector privado y la sociedad civil a formar coaliciones anticorrupción en sus respectivos países.¹⁰

La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) concentró sus programas anticorrupción a nivel más local. En Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, USAID enfatiza el fortalecimiento de la democracia local a través de la participación ciudadana, los programas de construcción de instituciones locales y la implementación de mecanismos de control internos. Con la guía técnica de la vicepresidencia de Colombia y la asistencia financiera de USAID, los gobernantes de las capitales regionales colombianas suscribieron "Pactos por la Transparencia" que establecen

compromisos específicos entre los funcionarios electos y sus electores para lograr una gestión administrativa más eficiente y transparente y reducir la corrupción. Alarmados por lo que se ha dado en denominar la creciente "crisis de legitimidad democrática" en Ecuador, USAID continúa proveyendo asistencia técnica con el propósito de fortalecer la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y ofrece educación cívica con miras a generar una cultura que esté a favor de la rendición de cuentas y de la democracia.¹¹

A través del Programa Global de Lucha contra la Corrupción y con la ayuda financiera de USAID, la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Delito comenzó a implementar un programa de fortalecimiento de los gobiernos locales en Colombia en octubre de 2001. Los alcaldes de las ciudades de Ibagué, Manizales y Pasto suscribieron acuerdos anticorrupción con el fin de mejorar el acceso a la información y aumentar la transparencia en procesos administrativos como el de licitaciones públicas.¹²

NACIONALES

Varios países sudamericanos fueron arrastrados a la que resultó ser la peor crisis económica de la región en dos décadas. Desde Argentina, la crisis se propagó a Brasil, Paraguay y Uruguay y planteó una seria amenaza para las otras economías inestables en Bolivia y Venezuela. En este contexto, los casos de corrupción de alto perfil relacionados con líderes políticos, dudosos financiamientos de campaña, connivencia en los procesos de privatización y lavado de dinero socavaron aun más la confianza de la sociedad en el gobierno y la confianza de los inversores en los mercados sudamericanos.

El caso del ex presidente de Perú Alberto Fujimori y su ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, se convirtió en uno de los escándalos más notorios de la región, con la supuesta adquisición de armas, fraudes inmobiliarios e indebida asignación del presupuesto militar y policial.¹³ Las docenas de personas fil-

mas aceptando sobornos en los infames "Monte-videos" ilustraron vívidamente que el escándalo involucraba a todas las ramas de gobierno, así como también a la comisión electoral independiente, bancos y grandes organizaciones de medios. Luis Moreno Ocampo, presidente del capítulo argentino de Transparencia Internacional y profesor de Stanford University, ha declarado que estas "redes sociales" de corrupción se extienden mucho más allá de un único presidente o ministerio, y son capaces de subvertir incluso a "la burocracia más cuidadosamente organizada".¹⁴

La administración de transición de Valentín Paniagua realizó algunos esfuerzos para combatir la corrupción en el mundo político peruano después de las consecuencias desastrosas de la era Fujimori - Montesinos. Están en curso más de 240 investigaciones relacionadas con el caso, lo que involucra a más de 1.300 per-

sonas. Los hallazgos preliminares indican que Fujimori podría haber robado más de USD 180 millones.¹⁵ A pesar del gran número de investigaciones y la encarcelación de Montesinos, las encuestas sugieren que el 75 por ciento de los peruanos cree que la corrupción persistirá.¹⁶ Los analistas expresaron su preocupación de que el ímpetu y entusiasmo con que la administración interina de Paniagua lanzó la Iniciativa Nacional Anticorrupción hayan disminuido gradualmente durante la administración del Presidente Alejandro Toledo.¹⁷

Más allá de Perú, un número creciente de funcionarios públicos - incluso presidentes - está siendo procesados judicialmente por supuestos delitos en el ejercicio de la función pública. Una investigación realizada en Bolivia de varios funcionarios políticos, incluyendo el ex presidente Hubo Banzer, su cuñado y congresistas, supuestamente descubrió una

estafa al erario público por millones de dólares. Las investigaciones se iniciaron durante la corta presidencia de Jorge Quiroga, quien asumiera el poder en agosto de 2001 y prometiera eliminar la corrupción y el nepotismo. Sus esfuerzos fueron parte de una reorganización institucional más amplia que fue vista con beneplácito y asistida por el Banco Mundial y otras IFI. Dado que Quiroga debió retirarse después de tan sólo un año de ocupar el cargo por el límite impuesto a su mandato, no está claro cómo el programa de reforma proseguirá sin el liderazgo político de su principal arquitecto.¹⁸

En Paraguay, los fiscales acusaron al Presidente Luis Gonzáles Macchi de invertir fondo públicos

ilegalmente, mientras que el ex presidente Juan Carlos Wasmosy fue condenado a cuatro años de prisión por transferir USD 6 millones de las arcas públicas a un banco privado del cual era accionista oculto.¹⁹ El Presidente Macchi declaró el estado de emergencia tras varios días de violentas manifestaciones de los ciudadanos que exigían su renuncia. La protesta se desencadenó debido a la virulenta oposición al plan de gobierno de privatizar la telefónica estatal así como también por las acusaciones de corrupción.²⁰ Brasil, el país más grande de Sudamérica, constituye un importante indicador del estado de corrupción en el continente. A pesar de que se lograron avances durante los seis años del gobierno del Presi-

dente Fernando Henrique Cardoso, muchos brasileños están desilusionados y la mayoría cree que la corrupción está empeorando.²¹

Esta percepción fue confirmada a principios de la última campaña electoral presidencial cuando la candidata principal del Partido del Frente Liberal, Roseana Sarney, fuera obligada a abandonar sus aspiraciones presidenciales después de descubrirse que había acopiado billetes por 1.300.000 reales (USD 02 Corrupción 400.000) en la oficina de su firma consultora. Su marido y socio admitió que el dinero estaba destinado a apoyar su campaña, en violación de las reglas de financiamiento de campaña.²²

¿ENVIO DE DINERO AL EXTERIOR? JERSEY CONTRA BRASIL EN EL CASO DE PAULO MALUF

En junio de 2001, uno de los principales periódicos brasileños informó que habían aparecido más de USD 200 millones depositados en una cuenta del Citibank en Jersey, Islas del Canal, que presuntamente pertenecía al político brasileño Paulo Maluf.¹ Ex alcalde de la ciudad de San Pablo, ex gobernador y prominente figura de la política nacional, Maluf ya había sobrevivido a numerosas acusaciones de corrupción cuando surgiera esta última. Debido a las preocupaciones en torno al origen sospechoso del dinero, la cuenta en Jersey ha sido efectivamente "congelada".

La fiscalía de San Pablo se ha interesado profundamente en la cuenta. Sospecha que Maluf y su familia han utilizado cuentas en el exterior para lavar grandes sumas de dinero adquiridas fraudulentamente durante el mandato de Maluf como alcalde. En especial, se sospecha que Maluf había recibido pagos ilegales de proveedores contratados para realizar obras públicas para la ciudad de San Pablo. La fiscalía ha recabado pruebas y tomado declaraciones que confirman que los contratistas responsables de las obras públicas cooperaban con Maluf a través de un sistema de subcontratistas, sobornos y cambio de dinero en el mercado negro.

Las pruebas parecen indicar que la cuenta en Jersey servía como vía de escape para el dinero adquirido corruptamente. La confirmación de Jersey que Maluf es, de hecho, el beneficiario de la cuenta permitirá a las autoridades en Brasil abrir una investigación sobre una posible evasión impositiva. Sin embargo, los funcionarios brasileños han expresado cierta frustración. A pesar de haber remitido una gran cantidad de pruebas y numerosos pedidos de información a Jersey, en julio de 2002, más de un año después, todavía no se avizoraba la recepción de la confirmación sobre la identidad del tenedor de la cuenta. Los funcionarios en Jersey argumentaron que todavía no habían recibido el correspondiente formulario de solicitud de Brasil para poder suministrar la información. Como resultado, mientras que las autoridades de ambos lados tratan de discurrir las cuestiones legales, el caso contra Maluf se ha estancado. El costo de los proyectos de obras públicas durante la administración de Maluf atrajo la atención de los investigadores debido a que en gran medida tendía a exceder el costo de las obras en otros lugares. Por ejemplo, el costo de construcción por metro de una simple calle en la ciudad durante la administración de Maluf era igual al

costo de construcción de un metro del Túnel del Canal, la vía ferroviaria subterránea que une Gran Bretaña con el resto del continente europeo.

Maluf insiste en que el costo de los proyectos públicos que él administró era legítimo, que nunca recibió dinero malhabido y que nunca tuvo dinero en el exterior. Continúa desestimando todas las acusaciones de comisión de delitos, sosteniendo que son mentiras diseñadas para empañar su reputación. Maluf sigue siendo popular en el estado de San Pablo, especialmente entre los pobres. Durante sus muchos mandatos, presidió una serie de programas de obras públicas, inclusive la construcción de caminos, puentes y túneles. Dichos proyectos se consideraron una medida de la capacidad de poder hacer las cosas. Pero la corrupción es preocupante para los brasileños o, por lo menos, el nivel de tolerancia está disminuyendo. El hecho de que Maluf fuera derrotado por Marta Suplicy en el año 2000 en su intento de ser reelecto como alcalde de San Pablo puede evidenciar un cambio de actitud: Suplicy se postuló sobre la base de una propuesta anticorrupción.

El impasse entre Jersey y Brasil constituye un claro ejemplo de las dificultades que se presentan al intentar procesar causas donde pre-

suntamente fondos ilegales han sido enviados al exterior. Pueden surgir problemas similares o más contenciosos cuando lo que está en juego es la repatriación de fondos robados.

Roberto Cosso, *Folha de S. Paulo* (Brasil), 10 de junio de 2001.

Dicho sea a su favor, la administración Cardoso ha registrado importantes avances en el frente anticorrupción. La Ley de Responsabilidad Fiscal 2000 sancionada en su país, que aumenta el control y monitoreo del gasto público, se implementó completamente durante el 2002, y la oficina encargada de la fiscalización financiera interna fue removida de la égida del ministerio de finanzas para incrementar su independencia.²³

Pero tal avance pasa desapercibido para la mayoría de los brasileños. En una encuesta pública realizada a mediados del año 2002, el 51 por ciento de los encuestados respondió que para ellos la situación de corrupción en el ámbito federal había empeorado bastante o demasiado durante los dos años anteriores; el 41 por ciento dijo que para ellos se estaba agravando en el ámbito estatal; y el 40 por ciento respondió de igual manera con respecto a la corrupción municipal.²⁴

Los críticos culpan en gran medida a la compleja y cambiante red de alianzas entre los partidos políticos de Brasil. Al conformar alianzas entre una serie de diferentes partidos políticos con el único propósito de ganar las elecciones, estos "matrimonios por conveniencia" han entorpecido los esfuerzos anticorrupción de Cardoso ya que cualquier ofensiva sería comprometería a miembros de su propia coalición.²⁵

Colombia sufre las trágicas consecuencias del robo endémico perpetrado por políticos y funcionarios públicos durante años. Entrelazada

con la producción y el tráfico de estupefacientes, esta conducta exacerbó el subdesarrollo y la ilegalidad en las zonas rurales, donde una brutal guerra continúa cobrando la vida de 3.500 civiles por año. Un estudio del Banco Mundial dado a conocer en febrero de 2002 reveló que el 50 por ciento de los contratos por compras estatales contiene algún elemento de soborno.²⁶ Otro informe del Banco Mundial estima que el costo de la corrupción en Colombia asciende a USD 2.600 millones por año, el equivalente al 60 por ciento de la deuda del país.²⁷

En el centro de las tensiones que amenazaron con destruir la sociedad venezolana en el periodo 2001-02 se encuentran las acusaciones de corrupción gubernamental y el uso indebido de fondos públicos. La oposición presentó una serie de denuncias contra el Presidente Hugo Chavez acusándolo de malversar los fondos de estabilización macroeconómica y de omitir declarar el efectivo que recibiera del banco español BBVA en una anterior campaña electoral. Los críticos también señalaron que el presidente había autorizado que los programas sociales en virtud del Plan Bolívar se realizaran con dinero en efectivo, una receta que incita el abuso.²⁸ Varios años después de acceder al poder montado sobre una ola de opiniones a favor de la lucha anticorrupción, Chavez ahora está acusado de tolerar la corrupción en su propio gobierno.

En ningún otro lugar las protestas callejeras caracterizaron tanto al discurso político contemporáneo como en Argentina, que sufrió un total derrumbe económico y político durante el 2001 y 2002. Los ciudadanos, cuando no se encuentran en enfrentamientos con la división gendarmería de la policía, se desplazan por las calles para protestar contra un sistema que consideran sobredimensionado, corrupto e insensible.²⁹ El

país sigue siendo golpeado duramente por las denuncias de abuso durante el gobierno de Carlos Menem quien fue detenido durante seis meses en el año 2001 por imputaciones de contrabando de armas y lavado de dinero, aunque fue liberado después de una controvertida resolución del tribunal superior.³⁰ También se dispuso el procesamiento y prisión preventiva del ex ministro de economía Domingo Cavallo como consecuencia de este escándalo, que involucró el desvío ilegal de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia.³¹

Se cree que Cavallo firmó decretos que ordenaban la venta de armas a Panamá y Venezuela y que se desviaron ilegalmente a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. La más reciente acusación contra Menem es que habría recibido USD 10 millones de Irán para cubrir a los terroristas de ese país que habrían participado en el atentado contra una sinagoga en Buenos Aires en julio de 1994.³²

Una encuesta realizada por Corporación Latinobarómetro en Chile revela que el 71 por ciento de los encuestados allí creen que la situación de corrupción está empeorando.³³ Chile recibió una calificación mejor que muchos países de Europa Occidental en el Índice de Percepción de la Corrupción 2002 de TI, pero los expertos dicen que Chile puede mejorar en las áreas de participación de la sociedad civil y control del financiamiento de campañas políticas.³⁴ Un reciente estudio realizado por el BID reveló una creciente insatisfacción con las reformas en los últimos años, especialmente en las clases medias decepcionadas con los líderes de la última década. El mismo informe señala que dos de cada tres latinoamericanos están desilusionados con la democracia y solamente uno de cada dos piensa que la democracia es la mejor forma de gobierno, según una encuesta de opinión sobre el tema.³⁵

SECTOR PRIVADO

El mismo informe del BID reveló que el 63 por ciento de los consultados está convencido de que los resultados de las privatizaciones son negativos. Uno de los autores observa: “Lo que más duele a los latinoamericanos no son las privatizaciones, sino la corrupción que las ha rodeado en algunos países”.³⁶

El proceso de privatizaciones corrupto y no transparente de las compañías estatales es una fuente común de resentimiento en toda la región. El Presidente de Perú Alejandro Toledo se vio obligado a suspender la venta de dos compañías públicas de electricidad a Tractebel de Bélgica después de las violentas manifestaciones en junio de 2002. Toledo había prometido en su campaña electoral no privatizar las dos compañías, pero la venta de las mismas se convirtió en parte de un esfuerzo mayor para honrar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Los opositores argumentaron que las ventas carecían de transparencia y un funcionario de alto rango admitió que el gobierno nunca “había explicado o probado al país cómo había llegado al precio de venta, cuáles serían las tasas de inversión y qué ocurriría con los trabajadores después de la venta”.³⁷

Mientras que el gobierno reconsideraba el acuerdo con Tractebel, los investigadores indagaban a la compañía con relación a las acusaciones de que Tractebel le había pagado a Fujimori USD 10 millones en concepto de sobornos entre 1996

y 1998. El periódico peruano *La República* informó en marzo de 2002 que un ex asesor de Tractebel tenía pruebas que confirmaban que una unidad de la compañía había pagado sobornos a Fujimori en relación con la compra de una empresa de servicios eléctricos en 1997. La compañía vehementemente niega las acusaciones.³⁸

La venta de la empresa estatal de telecomunicaciones Copaco en Paraguay también fue suspendida después de que miles de ciudadanos bloquearan caminos y puentes a modo de protesta. La privatización estaba atestada de irregularidades y un ex ministro para la reforma del estado fue formalmente acusado por supuestamente haber sustraído parte del dinero correspondiente al acuerdo.³⁹ El Banco Mundial, que proveyó asistencia técnica al programa, dijo en junio de 2002 que estaba solicitando una auditoría especial de las cuentas del proyecto.⁴⁰

La quiebra de Enron y la corrupción que rodeó al deceso de la empresa tuvo repercusiones en toda Sudamérica. Se estableció una comisión dentro del Congreso de Bolivia para investigar la adquisición en 1994 por parte de Enron de una participación en el gasoducto entre Bolivia y Brasil y en la unidad de transporte de la ex petrolera estatal YPF. El congresista Armando de la Parra, quien dirige la investigación, dijo que las otras compañías invitadas a participar en la licitación recibieron avisos sólo con 13 días de antelación,

mientras que Enron estaba en contacto con la oficina de Sánchez de Lozada sobre el proyecto desde hacía cinco meses. “Todavía no hemos descubierto pruebas contundentes que lo confirmen, pero todo apunta a un probable acto de corrupción”, dijo Parra. “Es obvio que la licitación pública fue un simulacro para enmascarar un arreglo secreto entre Sánchez y Enron”.⁴¹

El fútbol, la pasión deportiva del continente, también se vio desprestigiado por acusaciones de corrupción en el último año. Siete meses antes de que Brasil ganara su quinto título mundial en julio de 2002, se publicó un informe de 1.600 páginas como resultado de una investigación del congreso sobre supuesta mala administración y corrupción que acusaba a Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. El informe recomendaba el procesamiento de Teixeira - que también es miembro del comité ejecutivo de la FIFA- por la administración fraudulenta de la confederación de fútbol. Lo culpó por “la manera irracional y fraudulenta en que se administraron los fondos de la confederación para beneficiar a algunas personas”. Bajo la dirección de Teixeira, la confederación acumuló deudas por más de USD 10 millones entre 1995 y 2000, parte de la cual se originó en “gastos inadmisibles” como alquiler de limusinas a un valor de USD 2000 por día en Nueva York.⁴²

LA SOCIEDAD CIVIL

José Ugaz, principal investigador de la causa contra Montesinos y ex fiscal especial contra la corrupción, asumió la presidencia de una coalición recientemente formada en Perú llamada Proética, el socio de Transparencia Internacional en el país. Tras los compromisos asumidos en la primera Conferencia Nacional Anticorrupción en Lima en Junio de 2001, Proética se ha embarcado en una serie de actividades que intentan transparentar los procesos de contrataciones públicas y promover el acceso a la información. En retros-

pectiva, durante el primer año de la nueva administración en Perú, a mediados de 2002, Proética había recolectado la firma de 36 aclamadas personalidades peruanas en una carta abierta al Presidente Toledo que lo instaba a implementar un programa más eficaz de lucha contra la corrupción.

El capítulo nacional de TI en Argentina, la ONG Poder Ciudadano, extendió su programa de monitoreo cívico de las instituciones públicas movilizándolo y capacitando estu-

diantes, asociaciones vecinales y otros grupos. Poder Ciudadano lanzó un informe después de siete meses de monitorear al Senado argentino que describió a la cámara alta como una “institución capturada”, lo que confirma que muchas de las reglas relacionadas con la transparencia no se aplican en la práctica. Poder Ciudadano también dirige el proyecto de “Candidatos Visibles”, que ofrece un perfil completo de los candidatos a las elecciones parlamentarias y de sus gastos de campaña. El programa, que funciona en Argentina, Colom-

bia, y Panamá, tiene la intención de promover una cultura de rendición de cuentas de los bienes, financiamiento de campaña, antecedentes políticos y políticas entre los candidatos que aspiran a ocupar un cargo público.⁴³ En Ecuador se realizó un programa similar con el nombre ¿Quién es quién en las elecciones del 2000 y 2002? dirigida por la Corporación Latinoamericana del Desarrollo, capítulo nacional de TI en ese país.⁴⁴

Como lo reflejaron las violentas protestas en las calles de la Argentina y en otras partes de Sudamérica, los acontecimientos relacionados con los grupos formados por la gente común revelan una tendencia preocupante. Después de que se hiciera añicos la confianza en el proceso político, muchos sudamericanos parecen estar perdiendo la esperanza de poder solucionar sus problemas a través de los procesos constructivos que ofrece la democracia. “La exclusión genera-

da por la corrupción impide la acción colectiva”, observó Poder Ciudadano. “La sociedad puede reaccionar ante casos del pasado pero no logra organizarse para efectuar cambios futuros”.⁴⁵ Esto hace que la promoción de dichos grupos cívicos orientados a los procesos sea más importante que nunca antes.

Los medios, y los periodistas de investigación en particular, siguen siendo una de las fuerzas más potentes en la lucha contra la corrupción, a pesar de que a menudo, pagan por ello un alto precio. En 2001, la ONG Probidad (Periodistas Frente a la Corrupción, PFC) de El Salvador, catalogó 114 casos de periodistas que habían sufrido represalias en América Latina por investigar casos de corrupción; cinco de ellos fueron asesinados.⁴⁶ PFC registró 36 de esos atentados, inclusive dos asesinatos, en los primeros meses de 2002 solamente. La Comisión para la Pro-

tección de los Periodistas identificó a Colombia como uno de los peores lugares del mundo para ejercer la profesión de periodista.⁴⁷ En enero de 2002, un periodista que frecuentemente esgrimía críticas contra la corrupción en la provincia de Caldas fue baleado al salir de su oficina.⁴⁸

Por el contrario, los miembros del sistema de medios de comunicación en ocasiones son sometidos a investigaciones por corrupción. En Perú, las seis estaciones de televisión comerciales fueron investigadas después de emitir cintas secretas que mostraban a Vladimiro Montesinos distribuyendo cuantiosas sumas de dinero a funcionarios de los medios a cambio de una cobertura sesgada a favor del ex presidente Fujimori. Por lo menos, tres de los que aparecieron en el video abandonaron el país, inclusive el dueño de Panamericana Televisión, quien fuera arrestado al llegar a la Argentina.⁴⁹

ACCESO A LA INFORMACION EN SUDAMÉRICA

En el último año, se desarrollaron nuevas iniciativas de e-government (gobierno electrónico) en toda la región para suministrar información on line sobre procedimientos institucionales, programas, cuentas, gastos y servicios de las dependencias de gobierno. El gobierno argentino, por ejemplo, lanzó “Control Activo”, un sitio web que intenta aumentar el grado de participación ciudadana y permitir monitorear las licitaciones y contratos dentro del sector público.⁵⁰

La Internet se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para reducir la corrupción en las contrataciones públicas, permitiendo publicar los llamados a licitación, hacer un seguimiento de todas las compras públicas y ofrecer los resultados de las mismas on line. Brasil y Chile, al establecer Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) y ComprasChile (www.compraschile.cl) respectivamente, se convirtieron en los pioneros de la región en esta área. El sitio de e-government de Colombia (www.gobiernoenlinea.gov.co) ya está funcionando y Perú está traba-

jando para instalar un modelo electrónico similar.⁵¹

A menudo, la libertad de prensa se ve restringida en Sudamérica, lo que representa un significativo obstáculo para el acceso y difusión de la información. Entre enero y marzo de 2002 solamente, la ONG Periodistas Frente a la Corrupción documentó 36 casos de periodistas que eran amenazados a causa de los informes de corrupción que habían producido.⁵²

La libertad de prensa en Venezuela corre un grave riesgo tras el golpe que derrocara temporalmente al Presidente Hugo Chavez en abril de 2002. Atrapados entre los empresarios de medios hostiles a Chavez y los airados manifestantes simpatizantes de Chavez, los periodistas tienen dificultad en cubrir las noticias de manera imparcial. En la cima de la confusión durante el golpe, los venezolanos se vieron obligados a recurrir a la CNN para obtener información.⁵³

En los últimos 12 meses se observó muy poco progreso en el campo legislativo a favor del acceso

a la información.⁵⁴ Entre los acontecimientos más significativos se destaca la Ley de Integridad Administrativa en Chile, que formalmente introdujo el derecho de acceso a la información pública, y un proyecto de ley en Argentina sobre acceso a la información.⁵⁵ En Paraguay, una controvertida ley de acceso a la información que permitiría un acceso limitado a los registros públicos encontró una vigorosa oposición. Los periodistas argumentaron que la ley, firmada por el Presidente Macchi en julio de 2001, habría dificultado mucho más las investigaciones de casos de corrupción y que el gran número de procedimientos burocráticos habría menoscabado la capacidad de reportar las noticias. La ley fue finalmente derogada en septiembre de 2001.⁵⁶ El Parlamento está ahora considerando nueva legislación para abordar el problema de acceso a la información. Una propuesta que se está considerando fue redactada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay, con la colaboración de otros grupos cívicos.

Notas:

- 1 “Esfuerzos Antisoborno que producen beneficios en todo el Mundo”, Kiplinger Business Forecasts, 28 de junio de 2001, www.kiplingerforecasts.com.
- 2 Washington Post (EE.UU.), 30 de julio de 2002; Servicio de Noticias EFE, 30 de julio de 2002.
- 3 Los documentos del Comité de Expertos se pueden ver en www.respondanet.com/english/index.htm.
- 4 La Nación (Argentina), 4 de junio de 2002.
- 5 www.oecd.org
- 6 Michael W. Collier, “Combatiendo la Corrupción en Latinoamérica”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 159 (1 de enero de 2001).
- 7 BID Boletín de prensa 12 de marzo 2002, www.iadb.org/exr/PRENSA/2002/cp5602E.htm.
- 8 BID Boletín de prensa, 24 de octubre de 2001, www.iadb.org/exr/PRENSA/2001/cp19101c.htm.
- 9 BID Boletín de Prensa, 26 de junio de 2002, www.iadb.org/exr/PRENSA/2002/cp14202e.htm.
- 10 www.worldbank.org/wbi/governance/judicial-lac.htm
- 11 www.ard-decentralization.com/Colombia.htm.
- 12 Ver “Informe de Resultados del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción”, p. 78, en www.anticorruptcion.gov.co/archivos/InfoAnticorruptcion.doc; ver también www.undcp.org/odccp/corruption.html#publications.
- 13 La República (Perú), 9 de noviembre de 2001.
- 14 Informe de Stanford, 4 de febrero de 2002, www.stanford.edu/dept/news/report/news/february6/ocampo26.html.
- 15 Washington Post (EE.UU.), 17 de diciembre de 2001.
- 16 Miami Herald (EE.UU.), 5 de julio de 2001.
- 17 Entrevistas con Luis Moreno Ocampo y Jairo Acuna, 31 de agosto de 2002.
- 18 Los Tiempos (Bolivia), 23 de octubre de 2001.
- 19 BBC News (Reino Unido), 10 de abril de 2002; New York Times (EE.UU.), 16 de abril de 2002.
- 20 Economist (Reino Unido), 18 de julio de 2002
- 21 Encuesta Ibope realizada por TI Brasil, www.transparencia.org.br.
- 22 Economist (Reino Unido), 14 de marzo de 2002.
- 23 Entrevista con Claudio Wéber Abramo, 31 de agosto de 2002
- 24 Encuesta Ibope realizada por TI Brasil, www.transparencia.org.br.
- 25 Entrevista del autor con Claudio Wéber Abramo de TI Brasil.
- 26 Informe sobre “Corrupción, Desempeño Institucional y Gobernabilidad: Desarrollando Una Estrategia anticorruptción para Colombia”, 21 de marzo de 2002; ver www.transparenciacolombia.org.co/textos_word/info_corruptcion
- 27 Ver [wbIn0018.worldbank.org/LAC/lacinfoclient.nsf/d29684951174975c85256735007fef12/921d461c069a434d8525696f00514142/\\$FILE/LJ%20SPEECH.pdf](http://wbIn0018.worldbank.org/LAC/lacinfoclient.nsf/d29684951174975c85256735007fef12/921d461c069a434d8525696f00514142/$FILE/LJ%20SPEECH.pdf)
- 28 Financial Times (Reino Unido), 21 de agosto de 2002.
- 29 International Herald Tribune (EE.UU.), 28 de febrero de 2002.
- 30 Clarín (Argentina), 23 de octubre de 2001.
- 31 Reuters (Reino Unido), 3 de abril de 2002.
- 32 New York Times (EE.UU.), 24 de julio de 2002.
- 33 Para mayor información, ver p. 282.
- 34 Inter Press Service, 28 de junio de 2001.
- 35 BID Comunicado de prensa, 9 de marzo de 2002, www.iadb.org/exr/PRENSA/2002/cp5602E.htm.
- 36 *Ibidem*
- 37 Latinamerica Press (Perú), 1 de julio de 2002.
- 38 Reuters (Reino Unido), 20 de junio de 2002.
- 39 Economist (Reino Unido), 18 de julio de 2002; Centro de Recursos de las Américas, Actualización Semanal de Noticias, 9 de junio de 2002. Ver www.americas.org.
- 40 Comunicado de Prensa del Banco Mundial no. 338, 4 de junio de 2002.
- 41 Corpwatch, 9 de mayo de 2002; www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=2528.
- 42 International Herald Tribune (EE.UU.), 6 de diciembre de 2001. 02 Corrupción Global 27/11/02 3:15 p.m. Página 114 Informe Global de la Corrupción 2003
- 43 www.transparency.org/activities/monitoring/monitor_index.html.
- 44 Esta experiencia incorporó por primera vez el uso de la tecnología creando una base de datos que difundió más de 12,000 curriculums y otra información relevante, que además fue distribuida en CD's a nivel nacional. Se puede consultar la base de datos en www.viviendolademocracia.org.
- 45 Presentación de Poder Ciudadano/InfoCívica sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2002.
- 46 Para mayor información, ver www.portal-pfc.org.

Notas:

- 47 Comunicado de prensa de la Comisión para la Protección de los Periodistas (CPJ), 3 de mayo de 2002; www.cpj.org/enemies/worst_places_02/worst_places_02.html.
- 48 Reuters (Reino Unido), 2 de febrero de 2002.
- 49 Washington Post (EE.UU.), 18 de diciembre de 2001.
- 50 www.controlactivo.com.ar
- 51 Clarín (Argentina), 19 de septiembre de 2001.
- 52 www.portal-pfc.org/english/reports/200203.html
- 53 CPJ Alerta, 17 de abril de 2002.
- 54 La República (Perú), 26 de diciembre de 2001.
- 55 El Mercurio (Ecuador), 16 de enero de 2002.
- 56 Última hora (Paraguay), 29 de julio de 2001; CPJ Alerta, 27 de septiembre de 2001.